

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION
Cámara Civil y comercial Común Concepción - Sala II



JUICIO: CHAILE CARMEN DELFINA C/ ARREGUEZ DANIELA EVELYN Y OT. S/
ACCIONES POSESORIAS - EXPTE. N° 70/22.-

Concepción, 12 de mayo de 2025

AUTOS Y VISTOS

Para resolver el recurso de apelación en subsidio interpuesto en fecha 12/2/2025 por la actora Carmen Delfina Chaile, con el patrocinio del letrado Miguel Francisco Paz, en contra del decreto de fecha 3/2/2025, dictado por la Sra. Juez en lo Civil y Comercial Común Única Nominación del Centro Judicial Monteros, en estos autos caratulados: “Chaile Carmen Delfina c/ Arreguez Daniela Evelyn y ot. s/ Acciones posesorias” - expediente n° 70/22, y

CONSIDERANDO

1.- Que por decreto de fecha 3/2/2025 la Sra. Juez en lo Civil y Comercial Común Única Nominación del Centro Judicial Monteros, dispuso: “Asistiéndole razón al letrado en cuanto a que la parte actora ya constituyó domicilio digital en el casillero de su nuevo letrado y considerando que el plazo para que la actora estime la base regulatoria se encuentra vencido, se dispone: Pasen los autos a despacho para regular honorarios del letrado Fernandez Christian Anibal.-”.

Contra dicha providencia la actora Carmen Delfina Chaile, con el patrocinio del letrado Miguel Francisco Paz, planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Al fundar el recurso manifestó que dicho proveído no tuvo en cuenta la revocatoria dictada en fecha 11/12/2024, en la cual se había ordenado expresamente revocar por contrario imperio el pase a despacho para resolver la regulación de honorarios del mencionado letrado y, en su lugar, se había dispuesto que, con carácter previo a resolver, se diera cumplimiento al trámite previsto en el artículo 39, inciso 3, de la Ley Arancelaria N° 5480.

Expresó que la Sra. Juez *a quo* ordenó que, antes de resolver sobre la regulación, se notificara a la parte obligada al pago —la Sra. Carmen Delfina Chaile— a fin de que, en el plazo de cinco días, estimara el valor pecuniario correspondiente, tal como lo exige la normativa aplicable, y que dicha notificación debía efectuarse en el domicilio real de la actora.

Sostuvo que la presentación realizada por el letrado Fernández, en la cual insiste en que la actora debe tenerse por debidamente notificada, no tuvo carácter recursivo respecto de la revocatoria oportunamente dictada. Agregó que dicha presentación constituye una reiteración de lo ya expresado en su anterior escrito, y que su verdadero objeto fue excusar su incumplimiento en relación con la obligación de notificar personalmente a la parte actora.

Asimismo, remarcó que el artículo 39 de la Ley 5480 establece formas específicas para determinar el monto del juicio a los fines de regular honorarios cuando ya ha recaído sentencia o se ha arribado a una transacción. Sin embargo,

sostuvo que ninguna de esas circunstancias se había verificado en el presente caso hasta el momento de su presentación, por lo cual resultaba aplicable el artículo 40 de la misma ley, que establece que, en ausencia de sentencia o transacción, el monto del juicio se determinará por la mitad de la suma reclamada, debidamente actualizada si correspondiera. Indicó además que, en caso de sobrevenir sentencia o transacción con posterioridad, se deberá efectuar una nueva regulación conforme al artículo anterior y según el resultado del proceso.

Reiteró que la revocatoria dictada por la Sentenciante tuvo fundamento suficiente y fue clara en ordenar la notificación en el domicilio real de la actora. Alegó que ni la disconformidad ni el silencio de su parte podían interpretarse como consentimiento ni implicaban preclusión, toda vez que el procedimiento establecido en el artículo 39, inciso 3, no había sido observado en primera instancia. En ese sentido, citó doctrina y jurisprudencia para sostener que no podía otorgarse un sentido desfavorable al silencio cuando no existe obligación legal de pronunciarse, y que tampoco podía hablarse de preclusión si nunca se inició el trámite correspondiente. Argumentó que la omisión o defecto en el cumplimiento del procedimiento previsto por la ley arancelaria conllevaba la nulidad de la regulación por afectar el derecho de defensa en juicio.

Finalmente, expresó que, antes de la última presentación realizada por el letrado Fernández, se le había retirado su autorización de acceso al expediente en el cual figura como parte actora. Indicó que, si bien el 8 de noviembre de 2024 se le había otorgado intervención legal sin reserva alguna, recién pudo advertir la referida restricción a través de su nuevo letrado el 2 de enero de 2025. Explicó que, tras consultar a la unidad judicial, su patrocinante fue informado —recién el domingo 2 de febrero— que a partir del 3 de febrero podría ingresar nuevamente al expediente, medida que consideró inexplicable.

Corrido el traslado de ley, en fecha 28/2/2025 contestó el letrado Christian Aníbal Fernández, donde solicitó el rechazo del recurso con expresa imposición de costas, en base a los argumentos fácticos y jurídicos que se tienen por reproducidos en pos de brevedad y economía procesal.

La Sra. Juez *a quo*, mediante sentencia n° 131 de fecha 27/3/2025 resolvió no hacer lugar al recurso de revocatoria, interpuesto por la actora, en contra del proveído de fecha 3/2/25 y concedió el recurso de apelación planteado. Fundó lo resuelto señalando que las notificaciones cuestionadas fueron válidamente cursadas al domicilio digital constituido por la misma actora al presentarse con nuevo letrado patrocinante. Señaló que dichas notificaciones fueron efectivamente leídas, lo cual surge del sistema informático, y que su abogado tenía acceso al expediente en ese momento, por lo que no corresponde el argumento de falta de compulsa. Además, citó la normativa procesal vigente que otorga plena validez a las notificaciones electrónicas realizadas en el domicilio digital constituido, así como también doctrina que respalda esta práctica incluso en cuestiones vinculadas a la regulación de honorarios. Aclaró, por último, que en el caso no existían intereses contrapuestos, ya que la notificación se efectuó al casillero digital de un letrado distinto al acreedor de los honorarios, lo que garantiza la participación activa de la parte en la defensa de sus intereses.

2.- Ingresando en el análisis de la cuestión, a los fines de resolver el recurso de apelación deducido en subsidio contra la resolución dictada por la Sra. Juez *a quo*, mediante la cual se rechazó el recurso de revocatoria interpuesto, corresponde adelantar que el mismo será desestimado, por encontrarse la decisión

recurrida debidamente fundada y ajustada a derecho.

En primer término, resulta oportuno destacar que el Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán establece, en su artículo 31, que el domicilio digital produce todos sus efectos legales mientras no se constituya otro. Esta disposición consagra la validez y vigencia del domicilio digital como canal formal de notificación para todas las actuaciones del proceso. Asimismo, el artículo 199 del citado cuerpo normativo dispone que las notificaciones judiciales se practicarán en el domicilio digital constituido, mediante el sistema informático habilitado a tal fin, y tendrán plena validez sin necesidad de la confección de cédula alguna. Por su parte, el artículo 200 enumera de forma taxativa -traslado de demanda y demás disposiciones expresas en el cuerpo normativo- los supuestos en los cuales la notificación debe efectuarse por cédula, entre los cuales no se encuentra comprendida la resolución cuestionada en autos.

Por otro lado, mediante decreto de fecha 8/11/2024 se tuvo al Dr. Paz Miguel Francisco, por apersonado como patrocinante de la actora Sra. Chaile Carmen Delfina, y por constituido domicilio digital en casillero virtual n° 20327756622.

Por decreto de fecha 21/11/2024 se ordenó correr traslado de la base propuesta por el letrado Fernández a la parte actora, en su domicilio real a los fines de lo dispuesto en el art. 39 inc. 3 de la ley 5480.

Ante la presentación del letrado Fernández en fecha 27/11/2024 donde enfatizó sobre la validez de la notificación al domicilio digital del letrado Paz, en fecha 2/12/2024 se ordenó: "I)- Asistiéndole razón al letrado presentante, se dispone tener por notificada a la contraria en el casillero digital constituido, conforme notificación digital depositada en casillero virtual y con fecha e lectura de 22/11/2024. II)- Atento a que el plazo para que la parte se expida respecto a la base regulatoria denunciada por el Dr. Fernandez venció en fecha 02/12/2024 a hs 10:00 con cargo extraordinario, se ordena: Pasen los autos a despacho para resolver la regulación de honorarios".

Posteriormente, en fecha 11/12/2024 se ordenó: "I)- (...) II) Por ello, corresponde revocar por contrario imperio el pase a despacho para resolver la regulación de honorarios del letrado Christian Aníbal Fernández y, en sustitutiva, ordenar que, previo a resolver, se de cumplimiento con el tramite previsto en el art. 39.inc 3 (Art.39.- Se considerará monto del juicio, a los efectos de la regulación de honorarios, habiéndose dictado sentencia o sobrevenido transacción: 3. Cuando para la determinación del monto debiera establecerse el valor de bienes y servicios susceptibles de apreciación pecuniaria, el tribunal, de oficio, correrá vista al profesional y al obligado al pago de los honorarios, con transcripción del presente artículo, para que en un plazo de cinco (5) días estimen dichos valores.). y, consecuentemente se notifique a la obligada de pago, Sra. Carmen Delfina Chaile, a fin de que dentro del plazo de 5 días estime la base regulatoria".

Ante la presentación del letrado Fernández en fecha 27/12/2024 donde enfatizó nuevamente sobre la validez de la notificación al domicilio digital del letrado Paz y su conocimiento de todo lo actuado, en fecha 3/2/2025 se ordenó: "Asistiéndole razón al letrado en cuanto a que la parte actora ya constituyó domicilio digital en el casillero de su nuevo letrado y considerando que el plazo para que la actora estime la base regulatoria se encuentra vencido, se dispone: Pasen los autos a despacho para regular honorarios del letrado Fernández Christian Anibal".

En efecto, visto lo actuado en autos, surge que el letrado Paz en todo

momento tuvo conocimiento de la estimación de base regulatoria practicada por el letrado Fernández, por lo que efectivamente tuvo oportunidad para practicar una nueva estimación en el caso de discordancia con ella en tiempo oportuno..

Sobre la base de este marco normativo, y tal como lo sostuvo con acierto la Sra. Juez a quo, las notificaciones fueron válidamente cursadas al domicilio digital oportunamente constituido por la parte actora al momento de presentarse con nuevo letrado patrocinante. En efecto, surge del sistema informático que las resoluciones fueron efectivamente leídas, lo cual evidencia el debido conocimiento de las mismas, descartando cualquier vulneración al derecho de defensa.

Asimismo, cabe rechazar el planteo relativo a la supuesta imposibilidad de compulsa del expediente. Conforme lo informó la Proc. María Emilse Robles - coordinadora- el profesional interviniente contó con pleno acceso al sistema de gestión judicial, y no se ha demostrado la existencia de impedimento técnico o procesal alguno que le hubiera vedado ejercer su derecho a la defensa en forma adecuada.

A mayor abundamiento, cabe destacar que la eventual exigencia de una notificación personal podría analizarse únicamente en aquellos supuestos en los que la resolución dictada pudiera generar un conflicto de intereses, como ocurre, por ejemplo, cuando existe una coincidencia entre el domicilio digital notificado y el del profesional beneficiario de los honorarios regulados, lo que configuraría la situación mencionada. Sin embargo, tal hipótesis no se verifica en el presente caso, toda vez que la notificación fue dirigida al casillero digital de un letrado distinto al acreedor de los honorarios, razón por la cual no puede sostenerse la existencia de intereses contrapuestos. En consecuencia, al no encontrarse comprometido el adecuado ejercicio del derecho de defensa, ni configurarse un supuesto que amerite una notificación en forma personal, corresponde reconocer plena validez a la notificación electrónica efectuada en el domicilio digital oportunamente constituido por la actora.

En conclusión, los fundamentos esgrimidos por la Sentenciante se encuentran debidamente respaldados en las normas procesales aplicables al caso y en la correcta interpretación de los actos cumplidos en autos. No se advierte vicio alguno que justifique apartarse de lo decidido, por lo que corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto en subsidio y confirmar la resolución recurrida en todas sus partes.

Por lo tanto, en base a lo normado por los art. 31, 199 y 200 CPCC, a las constancias de autos y los fundamentos vertidos por el recurrente en la presentación de revocatoria, corresponde no hacer lugar al recurso de apelación en subsidio interpuesto en fecha 12/2/2025 por la actora Carmen Delfina Chaile, con el patrocinio del letrado Miguel Francisco Paz, en contra del decreto de fecha 3/2/2025, dictado por la Sra. Juez en lo Civil y Comercial Común Única Nominación del Centro Judicial Monteros.

3.- Atento a que se trata de un mismo recurso, tanto las costas de primera instancia como las de esta Alzada se imponen a la parte recurrente en su carácter de vencida. (arts. 61 y 62 del CPCC).

Por ello, se

RESUELVE

I.- NO HACER LUGAR al recurso de apelación en subsidio interpuesto en fecha 12/2/2025 por la actora Carmen Delfina Chaile, con el patrocinio del letrado

Miguel Francisco Paz, en contra del decreto de fecha 3/2/2025, dictado por la Sra. Juez en lo Civil y Comercial Común Única Nominación del Centro Judicial Monteros, como se considera.

II.- COSTAS, como se considera. (arts. 61 y 62 del CPCC).

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER

Firman digitalmente:

Dra. María José Posse

Dr. Roberto Santana Alvarado

ANTE MÍ: Firma digital:

Dra. María Virginia Cisneros - Secretaria

NRO.SENT: 118 - FECHA SENT: 12/05/2025

FIRMADO DIGITALMENTE

Certificado Digital:

CN=POSSE Maria Jose, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 27130674513, Fecha:12/05/2025;CN=SANTANA ALVARADO Roberto Ramón, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 20125454187, Fecha:12/05/2025;CN=CISNEROS Maria Virginia, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 27355189347, Fecha: 12/05/2025;

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>